

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO SESENTA Y CUATRO CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ
D.C.,
(Juzgado Cuarenta y Seis de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple Transitorio)
-Acuerdo PCSJA18-11127-

Bogotá, D. C., once (11) de julio de dos mil veintitrés (2023)

REF: Expediente No. 11001400306420230107300 Acción de Tutela de Diego Sadid Losada Rubiano en contra de Alcaldía local de Rafael Uribe Uribe y Secretaria de Gobierno Distrital de Bogotá-

ASUNTO

Procede el Despacho a resolver la acción de la referencia, por la presunta vulneración al derecho de petición.

ANTECEDENTES

La petición y los hechos

Manifiesta el accionante, que para dar protección a su derecho de petición que estima conculcado, debe ordenarse a las accionadas le sea respondido el derecho de petición con radicado No 2023S81034412 del día 24 de marzo de 2023 y se me expida copia del expediente administrativo objeto de la petición.

LA ACTUACIÓN DEL JUZGADO

Al corresponder el conocimiento de la acción a este Despacho y una vez cumplidos los requisitos legales, por auto de 29 de junio de 2023, se admitió el libelo, se ordenó notificar a las accionadas para que en el término de un (1) día, contado a partir del recibo de la comunicación, se pronunciara sobre los hechos en lo que se soporta la presente acción y anexara la documentación pertinente. Se vinculó por pasiva con la Inspección de Policía localidad Rafael Uribe Uribe.-

Alcaldía local de Rafael Uribe Uribe y Secretaria de Gobierno Distrital de Bogotá- informo que es claro que esa entidad ha actuado de conformidad con las exigencias que imponen las normas aplicables; aclarando que no existe vulneración al derecho fundamental de petición.

En consecuencia, de los hechos narrados en el escrito de tutela y la actuación desplegada por la entidad representada, puede concluirse que la protección solicitada carece actual de objeto por hecho superado, aunado advierte que en este caso se requiere más información por parte del accionante, y en tal sentido se plasma en la respuesta entregada al accionante el 20 de mayo de 2023 con la intención de que exista una mayor claridad sobre el asunto

objeto de consulta” En atención a su escrito radicado bajo el número del asunto, a través del cual solicita copia del expediente administrativo que se desprende de cada una de las querellas descritas en el mismo, comedidamente le informo que, conforme al trámite legal, se procedió a trasladar su petición con sus respectivos anexos, por medio del memorando interno No 20236840001353, a las Inspecciones de Policía de la Localidad de Rafael Uribe Uribe, por ser las competentes para resolver su requerimiento. Lo anterior, para que, una vez agotado el procedimiento establecido, se emita respuesta de fondo el asunto objeto de la solicitud.”

Inspección de Policía localidad Rafael Uribe Uribe, el 30 de junio de 2023 envió respuesta al accionante al correo losadadiego72@gmail.com y diegolosadasegb1507@gmail.com, indicando que no se encontraron expedientes o actuaciones administrativas relacionadas y le solicitan aclarar el número del expediente y dirección exacta del inmueble.-

PROBLEMA JURÍDICO

Dictaminar si la queja constitucional es procedente, y de serlo analizar si sus fundamentos fácticos constituyen vulneración alguna de derechos fundamentales.

TESIS DEL JUZGADO

El caso puesto en consideración de la judicatura hace relación a la mora en la respuesta por parte de la accionada.

Expuestos los hechos que sustentan las peticiones, el **problema jurídico a resolver** se puede sintetizar en el siguiente cuestionamiento:

¿Se vulnera por parte de **Alcaldía local de Rafael Uribe Uribe y Secretaria de Gobierno Distrital de Bogotá** y Inspección de Policía localidad Rafael Uribe Uribe, el derecho fundamental de petición del señor **Diego Sadid Losada Rubiano**?

De los anexos allegados a la presente acción, se colige que la vulneración que dio origen a la presente acción constitucional, ha cesado respecto de la Inspección de Policía localidad Rafael Uribe Uribe quien dio respuesta el 30 de junio del año en curso, constituyéndose estos hechos en lo que la jurisprudencia constitucional ha denominado como hecho superado.

Esta información que permite tener como un hecho superado la actuación de la demandada, se entiende realizada bajo la gravedad del juramento con la sola presentación del escrito de respuesta, sugiriendo la aplicación del principio también de calado constitucional de la buena fe, no hallando razón valedera que haga suponer que lo ordenado no se efectivizará, desvirtuándose por esta vía la vulneración de los derechos fundamentales pregonados.

Por esta razón y en virtud que la potencial orden por vía de tutela recaería sobre el mismo pedimento que ya fue dispuesto por la accionada, no tiene sentido emitirla pues resultaría desde todo punto de vista inocua. Es decir, el juzgado partiendo del principio de la buena fe de la entidad accionada ha aceptado su manifestación, además por la presunción de veracidad y autenticidad que cobija la misma, de modo que todas las responsabilidades de los procedimientos pedidos por la accionante son de la entidad accionada.

En este orden de ideas, debe concluirse que si los requisitos esenciales de la acción de tutela son: (i) la existencia de una violación o amenaza directa de derechos fundamentales por la acción u omisión, (ii) la identificación de la persona cuyo derecho ha sido vulnerado o amenazado, (iii) y la relación de causalidad entre la acción u omisión y tal vulneración; cuando la acción en manera alguna vulnera los derechos fundamentales de las personas no tendrá razón de ser el ejercicio de este mecanismo judicial.

La Corte Constitucional al respecto ha dicho lo siguiente:¹

“Así las cosas, la eficacia de la acción de tutela reside en el deber que tiene el juez, si encuentra vulnerado o amenazado el derecho alegado, de impartir una orden de inmediato cumplimiento encaminada a la defensa actual y cierta del derecho en disputa.

Sin embargo, cuando la situación de hecho que origina la violación o amenaza ya ha sido superada, es decir, la pretensión instaurada en defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha, el instrumento constitucional –acción de tutela– pierde eficacia y por tanto, su razón de ser. En estas condiciones la orden que pudiera impartir el juez, ningún efecto podría tener y el proceso carecería de objeto, resultando improcedente la tutela; efectivamente desaparece el supuesto básico del cual parte el artículo 86 de la Constitución Política –la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales”. (subrayado fuera de texto).

Frente a **Alcaldía local de Rafael Uribe Uribe y Secretaria de Gobierno Distrital de Bogotá**, se considera que no vulnero derecho fundamental alguno al accionante ya que desde el 20 de mayo de 2023 le informo que se enviaba la petición a Inspección de Policía localidad Rafael Uribe Uribe, quienes eran los indicados a responder al pedimento.

Con fundamento en lo anterior, se tiene que, durante el trámite de la presente acción, la accionada con el escrito de contestación de la tutela se evidencia que al tutelante se le dio respuesta a su petición.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el **Juzgado Sesenta y Cuatro Civil Municipal de Bogotá D.C., (Juzgado 46 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple Transitorio)**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve:

RESUELVE:

Primero. Declarar la carencia actual de objeto en el asunto de la referencia por existir hecho superado, con fundamento en las razones anotadas anteriormente.

Segundo. Notificar esta determinación a la accionante y a las entidades encartadas, por el medio más expedito y eficaz.

¹ Corte Constitucional. Sentencia T-467 de 1996

Tercero. De no ser impugnado el presente fallo, remítase el expediente dentro del término legal a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Oficiese.

Cuarto. En caso de ser excluida de revisión archívese definitivamente. -

Comuníquese y cúmplase,

LILIAM MARGARITA MOUTHON CASTRO

Juez

Firmado Por:

Liliam Margarita Mouthon Castro

Juez

Juzgado Municipal

Civil 064

Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **95bb85ed2c0a13c74385727f82bf83fc14bc3366df163aed85710c700ded091c**

Documento generado en 11/07/2023 12:14:51 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>